



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

En el proceso ordinario laboral promovido por **JORGE ALBERTO CANO ÁLVAREZ**, contra **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN - E.S.P.** (en adelante **EPM**) y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante **COLPENSIONES**) procede la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** a estudiar la viabilidad de conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandante.

Solicitó el actor de manera principal, que se condene a EPM a reconocerle y pagarle la pensión vitalicia de jubilación voluntaria consagrada en el Decreto 3 de 1976 y las actas número 1115 de diciembre 11 de 1986 y 1122 del 6 de abril de 1987, de la junta directiva de EPM, por contar con más de 20 años de servicio y más de 50 años de edad, pensión que debe ser calculada con el 75% del promedio de todo devengado en el último año de servicios.

También solicita que se declare la ilegalidad de la desafiliación por parte de EPM en su calidad de empleador al ISS hoy COLPENSIONES, y que, como consecuencia de lo anterior, se declare que EPM se encuentra en mora u omisión en el pago de los aportes para los riesgos de IVM, por lo que constituye una renuncia a la subrogación pensional.

Igualmente solicita que se condene a EPM a reconocer intereses moratorios o en subsidio la indexación sobre las sumas adeudadas desde el momento de su causación y hasta que se verifique el pago efectivo de la obligación.

De manera subsidiaria, solicita que se condene a EPM a pagarle la pensión vitalicia de jubilación en su condición de servidor municipal, de conformidad con el Decreto 3 de 1976 y las actas número 1115 de diciembre 11 de 1986 y 1122 del 6 de abril de 1987, desde el retiro del servicio, momento para el cual tenía más de 20 años de servicio y más de 50 años de edad; calculada con el 75% del promedio de todo devengado en el último año de servicios, prestación que solicita sea cancelada hasta el momento en que la pensión sea asumida por el sistema general de pensiones que es administrado por COLPENSIONES, de conformidad con sus reglamentos, es decir, a partir del cumplimiento de los 60 años de edad y hacia futuro, la que solicita sea reconocida con el carácter de compartida,

continuando a cargo de EPM solo el mayor valor si lo hubiere. También solicita que se condene a COLPENSIONES, a pagar la pensión de acuerdo con las normas establecidas en el Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del 90%, teniendo cuenta todo el tiempo laborado, incluyendo los tiempos públicos con y sin cotización, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el importe de las mesadas pensionales, o en subsidio la indexación y las costas procesales debidamente indexadas.

El Juzgado de conocimiento, Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 07 de marzo de 2023, despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, argumentando que, para el 30 de junio de 1995, el demandante era beneficiario del régimen de transición, ya que constaba con más de 15 años de servicios, además de tener 44 años cumplidos, lo que le permitió obtener la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985 a cargo del ISS. Aduce la a quo, que no es posible acceder a la pretensión relacionada con el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en el Decreto 3 de 1976 y las actas número 1115 de diciembre 11 de 1986 y 1122 del 6 de abril de 1987, porque uno de los presupuestos de la norma, es que al 29 de enero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, el trabajador tuviera 15 años de servicios o más, que no es el caso del actor, ya que solo contaba con 14.31 años de servicios al sector público, además, afirma que debía haber acreditado 50 años antes del 30 de junio de 1995, para poder acceder a la pensión de jubilación para dicha data.

Argumenta que EPM antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, tenía a su cargo el riesgo pensional del demandante, pero con la incorporación de los servidores públicos al sistema general de pensiones, el demandante pasó a ser un afiliado obligatorio por el expreso mandato del art. 15 de la Ley 100 de 1993, y no voluntario como antes se consideraba, contexto en el cual la tesis de la demanda presenta confusión, en lo relativo a la incorporación obligatoria del demandante como servidor público al sistema general de pensiones, máxime que al 30 de junio de 1995, él no cumplía los requisitos de edad para el reconocimiento y pago de la pensión del Decreto 3 de 1976 y las actas número 1115 de diciembre 11 de 1986 y 1122 del 6 de abril de 1987.

Señala, que el demandante al solicitar de manera concomitante una pensión de jubilación a cargo de EPM sin susceptibilidad de ser compartida y solicitar al mismo tiempo la ilegalidad de su desvinculación en el sistema de reparto simple que administraba el ISS, incurre en impresiones respecto si EPM tenía la posibilidad de subrogarse o no con la vinculación, no obstante, advierte que, conforme las normas que han regido el riesgo pensional para el servidor público antes del sistema general de pensiones, quien asumía el riesgo era la entidad pública empleadora y la situación de afiliación en el sistema de reparto simple del ISS era discrecional, y a partir de esta circunstancia se consideraba o no la subrogación en el riesgo, por eso es que en relación con la pretensión principal de ilegalidad de desafiliación por parte del EPM del sistema de reparto simple que administraba el ISS, no es viable predicar tal ineficacia, porque para la época

en que ello ocurrió, la pertenencia al sistema era voluntaria o discrecional, siendo únicamente obligatoria la vinculación a partir del 30 de junio de 1995, como fecha límite para los servidores públicos del nivel territorial y bajo este presupuesto, EPM optó por asumir directamente los riesgos pensionales con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y solo en virtud de la nueva Ley de seguridad social, incorporó a los servidores como afiliados obligatorios, momento en el cual el accionante fue afiliado nuevamente a la entidad de seguridad social.

Dice que no encuentra estimación en la prosperidad de las pretensiones principales, porque para el 30 de junio de 1995 el demandante no cumplió el requisito de edad que le permitía tener derecho a la pensión de jubilación que deprecia y porque ninguna ilegalidad se puede advertir en la desafiliación que EPM hizo en relación con su pertenencia en el sistema de reparto simple que administró el ISS. Indica en relación con las pretensiones subsidiarias que hacen referencia al reconocimiento de la pensión de jubilación a cargo de EPM pero susceptible de ser compartida con COLPENSIONES, que en este caso es evidente que según el numeral 3 del art. 1 del D. 2527 de 2000, el reconocimiento de la pensión de jubilación procedería si para el 30 de junio de 1995 el demandante hubiere cumplido los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación o la densidad de 20 años de servicios, presupuesto que considera sí se cumple en este caso, pues para dicha data el demandante tenía 22.31 años de servicios al sector público, por lo que también hubiera tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo de EPM, susceptible de ser compartida con el ISS una vez cumpliera los requisitos del sistema general de pensiones, con una tasa de reemplazo del 75% del IBL que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio devengado por el demandante, y pagando por parte de EPM el mayor valor si lo hubiera una vez tuviera derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS por el fenómeno de subrogación pensional, sin embargo, afirma que, una vez fue liquidado por el Despacho la mesada pensional a la que hubiera tenido derecho el actor, teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios, conforme lo dispone el Decreto 1158 de 1994, no se encontró ningún mayor valor a cargo de EPM, ya que halló que para el año 2005, le hubiera asistido derecho a una pensión en cuantía de \$866.298 pesos, pero el ISS reconoció a partir de la citada calenda, una pensión en cuantía de \$880.900 pesos, por lo que al no existir un mayor valor a reconocer por parte de EPM, no hay obligación alguna para imponerle a la entidad codemandada.

En relación con la otra pretensión subsidiaria, que es la reliquidación de la pensión cancelada por COLPENSIONES, pero aplicando el Acuerdo 049 de 1990 y en específico la tasa de reemplazo del 90%, dice que a la luz de la jurisprudencia de las altas Cortes, ello no es posible en razón a que el actor fue beneficiario del régimen de transición, aplicando en su caso la ley 33 de 1985, lo que le permitió acceder a la pensión de vejez a los 55 años de edad y no a los 60 años que dispone el Acuerdo 049 de 1990, máxime que se demostró en el proceso, que fue el mismo actor quien solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de la citada prestación antes de cumplir los 60 años de edad, por lo que acceder a la solicitud de reliquidación pensional para tener en cuenta lo

dispuesto en el Decreto 758 de 1990, sería desnaturalizar el régimen de transición del que es beneficiario.

Esta Sala de Decisión Laboral, mediante providencia del 23 de febrero de 2024, **CONFIRMÓ** la sentencia del 07 de marzo de 2023.

Procede el recurso de casación en los procesos laborales ordinarios, cuando la cuantía del interés jurídico económico sea superior a ciento veinte (120) veces el salario mínimo mensual legal vigente, de conformidad con el artículo 86 del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, es decir, \$156´000.000 para el 2024.

Lo que determina la viabilidad del recurso de casación en materia laboral, por el aspecto cuantitativo, es la cuantía del interés para recurrir que está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por el fallo que se intenta recurrir, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

Se circunscribe el interés jurídico económico de la parte demandante, en las pretensiones incoadas en el libelo demandatorio, dejadas de reconocer en ambas instancias, relacionadas con la pensión vitalicia de jubilación, cuantificada hacia el futuro teniendo en cuenta la vida probable del actor (13.3 años) y la pensión mínima del año 2024 (\$1´300.000) multiplicado por 13 mesadas, asciende a **\$224´770.000**; cifra que, supera ampliamente la señalada en la norma.

Lo anterior indica que tiene derecho el recurrente a que el proceso sea revisado por la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral de Casación.

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, **CONCEDE**, el recurso de casación interpuesto por la parte **DEMANDANTE** contra el fallo proferido por esta Corporación.

Lo resuelto se ordena notificar en anotación por ESTADOS.

Los magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
Nº**067** del **19 DE ABRIL DE 2024**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunalsuperior-de-medellin-sala-laboral/161>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8d613d51d85cb00694ba76817b4fec0d491c89e913a900a024ed13ffc7c5bd8**

Documento generado en 18/04/2024 01:59:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>